

Octubre 8 de 1964

36ª REUNION — Continuación de la 1ª SESION DE PRORROGA

Presidencia del doctor CARLOS H. PERETTE, vicepresidente de la Nación

Secretario: señor CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

Prosecretario: señor DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ABDALA, Demetrio César
ACUÑA, Ernesto N.
ACUÑA, Ramón Edgardo
AGUIAR VAZQUEZ, Américo Ángel
AGUIRRE LANARI, Juan R.
ASTUDILLO, Félix E.
BASSI, Ricardo Alberto
BAUDUCCO, José Raúl
BERNARDO, Miguel Ángel
BLANCO, Rubén V. M.
CANTONI, Aldo H. N.
CAPRARO, Francisco
CASTIGLIONE, José F. L.
CORRADI, Luis Mauricio
DE REGE, Roberto
FASSI, Santiago Carlos
FERNANDEZ (h.), Mariano
FLORES, Domingo
FREYTES, Ángel R.
GADANO, José Enrique
GAMOND, Eduardo José Agustín
GELSI, Celestino
GHIGLIONE, Alfredo Miguel
LOPEZ, Jorge Oscar
LOVAGLIO, Dante A.
LUBARY, Ginés A.
MANCINI, Galileo
MARTINEZ GARBINO, Lucio José
MORILLO, Carlos Argentino
OLMEDO, Rolando
RAMIREZ, Lauro Francisco
RISPOLI ROMAN, Enrique G.

SALMÉN, Miguel
TARDELLI, Antonio
VARELA DÍAZ, Diógenes
VITTI, Alfonso Andrés
ZINNY, Mario

AUSENTES, CON AVISO:

ABDALA, Felipe
BARBICH, Adolfo A.
GONZALEZ FUNES, Tomás
MARTINEZ, José Alberto
MARTINEZ SARAVIA, Miguel A.
OVANDO, Ricardo
RODRIGUEZ, Eugenio L.
SAPAG, Elías
SNOPEK, Guillermo

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo aclarando la denominación de juzgados en acuerdos prestados por el Honorable Senado. (Página 1520.)
- II.—Mensaje del Poder Ejecutivo contestando la solicitud de informes del Honorable Senado sobre importación de pimiento en rama, semillas con vaina o pimentón molido. (Página 1520.)
- III.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se comunica la promulgación de la ley 16475. (Página 1520.)
- IV.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 1521.)

proyecto de ley en revisión sobre escalafón del personal de las cajas de jubilaciones y en la sesión del jueves próximo la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados en su sanción en el proyecto de ley sobre reincorporación de bancarios cesantes. (Página 1555.)

3.—Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo relativo a la aclaración de la denominación de juzgados en los acuerdos prestados por el Honorable Senado. Se aprueba. (Página 1556.)

4.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se transfiere a título oneroso a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires un terreno para posibilitar la apertura de la avenida Martín García. Se aprueba. (Página 1557.)

5.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en la invitación formulada por la Honorable Cámara de Diputados relativa a la exposición con carácter permanente, en el Salón de Pasos Perdidos de la citada Cámara, de los originales del texto de la Constitución Nacional. Se aprueba. (Página 1558.)

6.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en los proyectos de ley en revisión por los que se acuerdan a las señoras Clara Beatriz Álvarez Colodrero de Miranda Gallino, esposa viuda del ex diputado nacional Fernando Miranda Gallino; Victoria del Carmen Pozzi de Zanichelli, esposa viuda del ex diputado nacional Arturo Zanichelli, y Margarita Guillerma Barreto de Piragine Niveyro, esposa viuda del ex diputado nacional don Fernando Piragine Niveyro, las dietas que hubieran correspondido a éstos hasta la terminación de sus mandatos. Se aprueban. (Página 1559.)

7.—Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía en la invitación formulada por el Honorable Senado de la República del Perú para que una delegación del Congreso Nacional concorra a la Primera Reunión de Delegados de los Cuerpos Legislativos Latinoamericanos, a celebrarse en Lima. Se aprueba. (Página 1561.)

8.—Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en varios proyectos de ley acordando pensiones. Se aprueban. (Página 1562.)

9.—Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre escala de remuneraciones para el personal judicial. Se aprueba. (Página 1566.)

10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de los señores senadores Fassi, Gamond, Gadano y Barbich por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre las actividades de

la Superintendencia de Seguros de la Nación y del Instituto Nacional de Reaseguros. Se aprueba. (Página 1571.)

11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Gamond por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la Municipalidad de Jovita del departamento General Roca, provincia de Córdoba, una fracción de terreno de propiedad del gobierno de la Nación. Se aprueba. (Página 1573.)

12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Gamond por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir al Football Club de Villa Huidobro, del departamento General Roca, provincia de Córdoba, una fracción de terreno de propiedad del Ferrocarril General San Martín. Se aprueba. (Página 1574.)

13.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se sustituyen los artículos 2º y 3º de la ley 12.969. Se aprueba. (Página 1575.)

14.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se faculta a la Dirección General de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas a transferir al Circulo de Aeronáutica dos aviones y un planeador. Se aprueba. (Página 1576.)

15.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se faculta al Poder Ejecutivo a transferir a la Cooperativa Fraternidad Mitre Limitada, de la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, terrenos de propiedad del Ferrocarril General Belgrano. Se aprueba. (Página 1577.)

16.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar la adquisición de un terreno en la ciudad de La Plata con destino a la centralización de los edificios nacionales en dicha ciudad. Se aprueba. (Página 1578.)

17.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se incluye en los beneficios del artículo 4º de la ley 15.740 a varios profesionales que prestan servicios en el Instituto de Medicina Integral del Transporte. Se aprueba. (Página 1579.)

18.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en donación a la Cooperativa Argentina de Rehabilitados Limitada un inmueble ubicado en la localidad de Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. Se aprueba. (Página 1580.)

Se va a votar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por el que se acuerda pensión a Angélica Gascón de Castilla.

—Se aprueba sin observaciones en general y en particular.

Sr. Presidente. — Queda aprobado. Pasará a la Honorable Cámara de Diputados.

Se va a votar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por el que se aumenta la pensión acordada a Susana Inciarte y Gelabert de Escobar y a Mnuela y María Elena Inciarte y Gelabert.

—Se aprueba sin observaciones en general y particular.

Sr. Presidente. — Queda aprobado. Pasará a la Cámara de Diputados.

Se va a votar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por el cual se aumenta la pensión de la señorita Lucía María Angela Chiarini.

—Se aprueba sin observaciones en general y particular.

Sr. Presidente. — Queda aprobado. Pasará a la Cámara de Diputados.

9

REMUNERACIONES PARA EL PERSONAL JUDICIAL

Sr. Presidente. — Se va a tratar el orden del día en el proyecto de ley en revisión sobre escalafonamiento de sueldos de la justicia.

Por Secretaría se va a dar lectura al despacho de la comisión.

Sr. Secretario (Rodríguez). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión sobre escala de remuneraciones para el personal judicial y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

De acuerdo con el artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, las comisiones han dispuesto pasar este dictamen directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 8 de octubre de 1964.

Eduardo José Agustín Gamond. — Santiago Carlos Fassi. — Angel R. Freytes. — Rubén V. M. Blanco. — Enrique G. Rispoli Román. — José Enrique Gadano. — Galileo Mancini. — Mariano Fernández (h.). — Adolfo A. Barbich.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(1º de octubre de 1964)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir de la promulgación de esta ley fíjase para magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, e integrantes de los ministerios públicos y cuerpos auxiliares de la justicia la escala de remuneraciones que a continuación se indica, expresada en porcentajes inamovibles sobre el total de las asignaciones atribuidas a los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las categorías se enumeran a partir de la correspondiente a juez de cámara, adjudicándoles los porcentajes detallados, y en lo sucesivo deberán revistar a los fines presupuestarios en la siguiente forma:

Categoría	Nº	Asignación porcentual
Juez Corte Suprema y procurador general de la Nación		100
Juez de cámara, fiscal de cámara, defensor de pobres, incapaces y ausentes de 2ª instancia, asesor de menores de 2ª instancia, secretario de superintendencia, secretario judicial, secretario de la Procuración General, procurador fiscal y fiscal general letrado	1	80
Prosecretario de la Corte Suprema, secretario letrado de la Corte Suprema y abogado principal de la Procuración General, juez de 1ª instancia y presidente de la Comisión de Conciliación, director general	2	70
Subsecretario de superintendencia y subsecretario judicial	3	69
Subdirector general, fiscal de 1ª y 2ª instancia y defensor de pobres, incapaces y ausentes de 1ª y 2ª instancia	4	60
Vicepresidente de la Comisión de Conciliación, asesor de menores de 1ª instancia, fiscal de 1ª instancia, defensor de pobres, incapaces y ausentes de 1ª instancia y fiscal adjunto, letrado de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, director médico, perito médico, perito químico, perito calígrafo y perito contador	5	55
Secretario de Cámara, secretario general de la Comisión de Conciliación de la Justicia del Trabajo y secretario letrado	6	53
Secretario de juzgado, vocal de la Comisión de Conciliación y jefe de		

Categoría	Nº	Asig- nación por- centual
mandamientos y notificaciones, perito tasador y jefe de departa- mento	7	50
Jefe de despacho, letrado de la Corte	8	44
Oficial mayor de primera, jefe de despacho de la Corte, bibliotecario de la Corte, gerente de la Obra So- cial y prosecretario, jefe de la Cá- mara Criminal	9	43
Oficial mayor de segunda, jefe con- tador de la Cámara Comercial, se- cretario de fiscalía de Cámara del interior, secretario de fiscalía de Cámara de Capital, secretario de defensoría ante la Corte Supre- ma, secretario de asesoría de me- nores de 2ª instancia, segundo jefe de departamento, prosecretario de cámara y contador auditor de la Fiscalía de Investigaciones	10	42
Oficial mayor de 3ª, jefe de despa- cho de la Fiscalía de Investigacio- nes y subjefe de mandamientos y notificaciones	11	41
Oficial mayor de 4ª, jefe de división, médico radiólogo, jefe de obduc- ciones y jefe de laboratorio de análisis químicos y bacteriológicos	12	40
Oficial mayor de 5ª, oficial de des- pacho de la Corte y procurador general, oficial de despacho, ujier de la Corte, intendente, comisario, habilitado, jefe del Registro de In- capaces, administrador de la Mor- gue Judicial, secretario de fiscalía de 1ª instancia y jefe	13	39
Oficial mayor de 6ª, oficial de justi- cia, ujier, médico de Cámara del interior, oficial 1º y subhabilitado	14	38
Oficial mayor de 7ª, segundo jefe de división	15	36
Oficial mayor de 8ª, jefe, secretario del cuerpo médico, subintendente y subcomisario	16	34
Oficial mayor de 9ª, jefe auxiliar de la Corte, médico de obduccio- nes y médico de laboratorio ...	17	32
Oficial principal	18	30
Oficial principal de 2ª	19	29
Oficial principal de 4ª, cardiólogo, electroencefólogo, alergólogo, oto- rinolaringólogo, oftalmólogo, doc- tor en química o bioquímica, en- cargado de la sala de obducciones, médico de obducciones y médico de reconocimientos	20	28
Oficial principal de 5ª	21	27
Oficial principal de 6ª	22	26

Oficial principal de 7ª, oficial noti- ficador administrativo y oficial administrativo	23	25
Oficial	24	24
Oficial de 1ª	25	23,5
Oficial de 2ª	26	23
Oficial de 3ª	27	22,5
Oficial de 4ª	28	22
Oficial de 5ª	29	21
Oficial de 6ª y notificador	30	20
Oficial de 7ª y ayudante de toxico- logía	31	19
Oficial de 8ª	32	18
Oficial de 9ª	33	17
Auxiliar superior	34	16
Auxiliar mayor de 1ª	35	15,5
Auxiliar mayor de 2ª y enfermera.	36	15
Auxiliar mayor de 3ª	37	14,5
Auxiliar mayor de 4ª y juez de paz	38	14
Auxiliar mayor de 5ª	39	13,5
Auxiliar mayor de 6ª	40	13
Auxiliar mayor de 7ª	41	12,5
Ayudante de 5ª	42	9

Art. 2º — Toda vez que sea modificado el total de las compensaciones que perciben los señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicho tribunal actualizará las asignaciones de todos los magistrados, funcionarios y agentes comprendidos en esta ley de acuerdo con los porcentajes fijados en el artículo primero.

Art. 3º — Fíjense las siguientes bonificaciones complementarias para el personal comprendido en esta ley, sin distinción de categorías:

- Por antigüedad, pesos trescientos (\$ 300) mensuales, por cada año de servicio computables hasta un máximo de 30 años;
- Por subsidio familiar, las que determine la ley de presupuesto para el personal de la administración nacional;
- Por zona desfavorable, el 40 por ciento del total de las remuneraciones que por aplicación de la presente ley perciben quienes prestan servicios al Sur del paralelo 42;
- Por tareas peligrosas e insalubres, el 20 por ciento del total de las remuneraciones que por aplicación de dicho presupuesto perciben los agentes, sin distinción de cargo, que trabajan en forma permanente en la Morgue Judicial;
- Bonificación por título, pesos mil (\$ 1.000) mensuales por títulos secundario y pesos dos mil (\$ 2.000) mensuales por título universitario a los funcionarios, empleados y agentes del Poder Judicial a quienes por la Constitución o por ley no les sea requerido título alguno.

Art. 4º — El gasto que origine el cumplimiento de la presente ley se hará de rentas generales.

Art. 5º — Sustitúyense los artículos 69 y 70 y los incisos del artículo 82 de la ley de sellos (t.o. en 1961) y sus modificatorias, por los siguientes:

Artículo 69. — Las actuaciones que se inicien ante el Poder Judicial de la Nación y tribunales arbitrales, cuando el valor del juicio exceda de cinco mil pesos (\$ 5.000) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado, abonarán en concepto de reposición de fojas un impuesto del treinta por ciento (30 %) de las tasas que establece el artículo 82, debiendo ser como mínimo de seiscientos pesos (\$ 600) y como máximo de quince mil pesos (\$ 15.000).

El pago será único hasta la terminación de la actuación en todas las instancias, salvo cuando por ampliación posterior, acumulación de acciones o reconvencción, se aumente el valor cuestionado, en cuyo caso se pagará o se completará el impuesto hasta el importe que corresponda.

En las actuaciones no sujetas al pago de impuesto de justicia el gravamen a satisfacer por reposición de fojas será de seiscientos pesos (\$ 600).

En los juicios de apremio se pagará la mitad del impuesto fijado en los párrafos primero y tercero.

Art. 70. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz, los del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de la justicia de paz, de la Capital Federal y ante los jueces de paz del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el impuesto de actuación será de trescientos pesos (\$ 300).

Ante los jueces y tribunales del trabajo del impuesto se pagará con posterioridad a la sentencia definitiva y ante los demás jueces y tribunales en la misma oportunidad que en cada caso establece el artículo 86.

Artículo 82. —

- a) En los juicios por sumas de dinero, el quince por mil (15 %) en los ordinarios y ejecutivos, y el siete y medio por mil (7 ½ %) en los de apremio, sobre el importe reclamado;
- b) En los juicios de desalojo de inmuebles, el treinta por mil (30 %) sobre un importe igual a dos meses de alquileres;
- c) En los juicios reivindicatorios, posesorios e informativos de posesión, el doce por mil (12 %) sobre el valuación fiscal. En los de mensura y deslinde el seis por mil (6 %) sobre la misma valuación;

- d) En los juicios sucesorios, el seis por mil (6 %) sobre el valor de los bienes ubicados en jurisdicción nacional que se tome en cuenta para la liquidación del impuesto a la transmisión gratuita. Cuando tramiten varias sucesiones en un solo expediente, el impuesto de justicia se abonará sobre el haber de cada una de ellas;
- e) En los juicios de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil el seis por mil (6 %) sobre el importe que arroje la liquidación de los bienes del concurso;
- f) En los juicios de convocación de acreedores, cuando se apruebe un concordato, el tres por mil (3 %) sobre el monto total de los créditos no privilegiados verificados;
- g) En las solicitudes de rehabilitación de fallidos o concursados, el dos por mil (2 %) sobre el pasivo verificado en el concurso de quiebra;
- h) En la tramitación de exhortos, doscientos pesos (\$ 200) por cada exhorto;
- i) En los procedimientos judiciales sobre reinscripciones de hipotecas, el seis por mil (6 %) sobre el importe de la deuda. Cuando la reinscripción sea ordenada por exhorto librado por juez de otra jurisdicción, se abonará este impuesto en lugar del establecido en el inciso anterior;
- j) En los juicios voluntarios sobre protocolización o inscripción de testamentos, declaratorias de herederos e hijuelas, extendidos fuera de jurisdicción nacional y en los exhortos de jueces de otras jurisdicciones para la liquidación del impuesto sucesorio correspondiente a bienes ubicación del impuesto sucesorio correspondiente a bienes ubicados en jurisdicción nacional, el impuesto será del seis por mil (6 %) calculado en la forma prevista en el inciso d), en lugar del establecido en el inciso h);
- k) En todos aquellos juicios cuyo valor sea indeterminable, seiscientos pesos (\$ 600), salvo que el impuesto aplicable, calculado sobre algún valor parcial del juicio, sea superior a esta cantidad;
- l) Los oficios de inhibición o embargo que deban inscribirse en el Registro de la Propiedad, cien pesos (\$ 100);
- m) Las apelaciones de los autos o sentencias judiciales, con excepción de las que sean expresamente obligatorias en virtud de la ley, cien pesos (\$ 100);

- n) Las peticiones judiciales de expedientes que se encuentren en el Archivo General de los Tribunales, cincuenta pesos (\$ 50);
- o) La aceptación de cargos por los martilleros, nombrados de oficio o a petición de parte, cien pesos (\$ 100);
- p) Cada consulta de protocolos y expedientes existentes en el Archivo General de los Tribunales, cinco pesos (\$ 5);
- q) En general, los juicios susceptibles de tener valor, no previstos en la enumeración anterior, el quince por mil (15 %).

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTURO MOR ROIG.
Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente. — En consideración.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Fassi. — Señor presidente: este mes se cumplen 40 años de la fecha en que, abandonando mi labor habitual, me incorporaba como meritorio a los tribunales de la Capital Federal para ingresar, tres meses después, en el foro de esta misma Capital. Quiero decir que mantengo con la Casa de la Justicia una antigua y estrecha vinculación. Y en el curso de ese largo período en que actué activamente en el foro tuve ocasión de apreciar la eficacia, la laboriosidad y el empeño puestos de manifiesto por magistrados, agentes y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

Es, pues, con satisfacción que informo este despacho por el que se le da un régimen de escalafón razonable y justiciero, que no lo someta a contingencias que no guardan relación con las funciones trascendentes que cumplen y con la paz que debe reinar en la casa de la justicia.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han estudiado con prisa, pero prolijamente, el dictamen que viene con la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. Estiman que es una labor ponderable y que la Cámara de Diputados, en general, ha logrado establecer una escala que contempla a cada uno de los magistrados, funcionarios y agentes de la justicia con un criterio razonable y de equidad.

Es indudable que en esta materia caben los criterios personales y, desde este punto de vista, tal vez pudieron haberse admitido algunas modificaciones no sustanciales dentro de las escalas. Pero entendemos que esa tarea puede ser cumplida en cualquier momento mediante la correspondiente iniciativa legislativa. Sin embargo, es necesario que dejemos aprobada esta ley antes de terminar este período, y ése es el sentido del dictamen que hemos formulado.

El escalafón está organizado de tal manera que prevé en la escala máxima al juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al procurador general de la Nación. Yo diría que desde ese punto de arranque la retribución está fijada, más que en relación con la función, teniendo en cuenta el sacrificio que es dable pedir a todos los magistrados y agentes en esta contingencia nacional en que sabemos las dificultades del erario público.

Cuando el país se normalice desde el punto de vista financiero, cuando hayamos logrado la ansiada recuperación, estaremos en condiciones de modificar las retribuciones dentro de estas escalas, para ponerlas de acuerdo con la dignidad del cargo. En el interin, tenemos el deber y el derecho de reclamar a todos los ciudadanos argentinos que ocupan funciones eminentes, que hagan su pequeño gran sacrificio en aras de esta contingencia y para asegurar mejores destinos a la nacionalidad.

Partiendo del número índice fijado para esa función o porcentual, se va estableciendo una escala razonable que contemple no solamente la circunstancia que se trata de un poder, uno de los tres poderes de la Nación, y, en consecuencia, independiente de los otros, sino la calidad específica del agente de la justicia. La tarea que desarrollan, la necesidad de que viva en un marco adecuado, ejerciendo funciones alrededor de las cuales se mueven todos los intereses privados, y que tienen que lograr con ponderación, ecuanimidad y limpieza, dar a cada uno de los litigantes lo suyo.

Este proyecto también presenta el mérito de establecer una adecuada financiación, de tal manera que los aumentos que se proponen no van a incrementar el déficit presupuestario, sino que van a ser cubiertos con recursos que se obtienen por actuaciones que están relacionadas con la propia justicia.

Yo no creo que en esta materia sea una exigencia de la justicia que se financie con recursos propios, puesto que si hay una función trascendente del Estado es, justamente, la de hacer justicia. En el orden de los valores está primero la seguridad y luego la justicia, y después todas las demás actividades del Estado. De modo que todas las contribuciones, en primer lugar, deben apuntar a estos servicios que son tan indispensables puesto que sobre ellos reposa la paz social. Pero también en esta circunstancia están en la ley los recursos con los cuales se han de afrontar las mayores erogaciones.

Por otra parte, ha habido ponderación y juicio en la fijación de las escalas. Yo he tenido ocasión, en otras esferas de mi actividad, de tomar conocimiento de escalafones que son realmente disparatados, que no guardan relación con las retribuciones corrientes en la República. Si tal hubiera sido el contenido del presente no lo estaría informando, porque yo creo que nosotros debemos cumplir nuestra misión independizados de toda presión y teniendo en mira

los intereses generales de la Nación y no los particulares de cualquiera de los estamentos que constituyen la Nación misma.

Es con estas palabras, y considerando que no es necesaria mayor fundamentación, que doy por dadas las razones en virtud de las cuales las comisiones que han estudiado este proyecto esperan el voto favorable del honorable cuerpo.

Sr. Fernández. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — El proyecto de ley en revisión que considera este alto cuerpo tiende a establecer con carácter permanente y móvil para la totalidad de los integrantes del Poder Judicial, sin distinción de categorías ni cargos, un sistema porcentual de remuneraciones con relación al ya establecido anteriormente por el decreto 6.335/63.

Evidentemente, y lo ha dicho ya el señor senador Fassi, entraña este proyecto de ley una solución para sectores que con el ordenamiento legal anterior estaban postergados en cuanto a las remuneraciones que percibían. Es de estricta justicia manifestar que todo ese personal, que en sus distintas categorías tiende a que se cumpla el supremo principio de hacer justicia, tiene que ser motivo de un tratamiento adecuado, especialmente en lo que se relaciona con la seguridad económica, en un momento en que el deterioro del signo monetario los coloca en una situación angustiosa.

Ya se dijo en la Cámara de Diputados que el mencionado proyecto se basaba fundamentalmente en un anteproyecto que hiciera llegar la seccional 322 de la Unión del Personal Civil de la Nación. Y ese anteproyecto, repito, no pudo ser motivo de grandes reformas porque el mismo entrañaba una solución justa y equitativa para un reclamo que lógicamente debía ser aceptado por el Parlamento.

Este proyecto de ley que estamos considerando tiende, pues, a borrar aquellas diferencias que introdujo el decreto 6.335 y a dar un trato igualitario sin distinción de categorías a los magistrados, funcionarios y agentes judiciales de la Nación. Entraña también una nueva concreción legislativa del principio moderno de la movilidad de las remuneraciones, las cuales, en orden a las categorías significan para el futuro del agente judicial una seguridad que, considerada desde el punto de vista económico, tiene gran importancia para ese ponderable sector laboral, ya que prácticamente, por la responsable dedicación a esas funciones, se encuentra impedido de hacerlo en otras con las que podría reforzar su presupuesto familiar.

En este sentido, y porque es de estricta justicia dar sanción a este proyecto, el bloque de Movimientos Populares Provinciales adhiere al mismo para que su aprobación lleve tranquilidad y seguridad a ese sector de empleados, funcionarios y magistrados de la justicia nacional.

Sr. De Rege. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador De Rege.

Sr. De Rege. — Señor presidente: nuestro bloque apoya decididamente los aumentos al personal de la justicia, que los pone en condiciones dignas de subsistencia.

Es muy común oír reclamar por la supuesta falta de eficiencia del Poder Judicial, y de alguna manera esos reclamos caen sobre los que, día a día, dedican su esfuerzo a esta tarea. Sin embargo, pocos conocen las condiciones difíciles en las que debe desarrollar su actividad la administración de justicia, que muchas veces no cuenta con lo elemental para su funcionamiento.

Uno de los basamentos esenciales para edificar una sociedad comunitaria en la cual el hombre pueda realizarse consiste en una equilibrada aplicación de las normas legales con rectitud y sin apremio. Esta situación no ha de conseguirse en medio de dificultades económicas.

Por estas circunstancias, creemos que debe apoyarse con todo entusiasmo este escalafón para el personal del Poder Judicial, por el que sus integrantes vienen bregando desde hace tanto tiempo y que hoy encuentra eco con la sanción de esta ley.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Aguirre Lanari.

Sr. Aguirre Lanari. — Simplemente, señor presidente, la he solicitado para dejar expresada nuestra adhesión a este proyecto de ley que cuenta con la unanimidad de pareceres exteriorizada —quiero recalcarlo— no bajo la presión ni el interés de carácter electoral sino merced a una estricta convicción de justicia que nace en la comprobación y en la experiencia que tenemos de la difícil misión que cabe a estos abnegados colaboradores de la misión de arbitrar justicia.

Y es que en verdad, señor presidente, quienes tenemos algún contacto con la función que desarrollan los magistrados y demás agentes de la administración judicial sabemos de qué manera a veces humilde, silenciosa y no espectacular, colaboran con fe y con tesón en la marcha de esa tarea augusta de dar a cada uno lo suyo y de afianzar la seguridad para todos los habitantes de la Nación. Por eso, todo lo que se haga para asegurar el decoro material, para llevar tranquilidad espiritual y para hacer que puedan poner su corazón y su cerebro exclusivamente en esa tarea de colaboración fecunda y silenciosa que entraña la función judicial, será una obra de justicia y será asegurar, al mismo tiempo, la realización de uno de los elementos fundamentales para la convivencia y la paz social.

Por estas circunstancias, señor presidente, y abonando las razones ya expuestas por los oradores que me han precedido, también nosotros vamos a dar nuestro voto favorable al proyecto materia de consideración.

Sr. Salmén. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salmén.

Sr. Salmén. — Nuestro bloque adhiere a los conceptos vertidos por los señores senadores preopinantes en el sentido de reconocer la importante y trascendente labor que cumplen los empleados de la administración de justicia y el elevado concepto que esa función merece por parte de este cuerpo.

Como fue dicho, este proyecto de escalafonamiento de sueldos de la Justicia no compensa las debidas exigencias, pero sí significa a todas luces un evidente progreso y un testimonio de solidaridad con la trascendente, importante y silenciosa labor que vienen desarrollando estos servidores del país.

Con tal criterio, y para no abundar en otras consideraciones, en base a los precisos conceptos ya vertidos, reitero que nuestro bloque adhiere entusiastamente a este dictamen de comisión y a los fundamentos expuestos.

Sr. Presidente. — Se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

—En particular es igualmente aprobado.

Sr. Presidente. — Queda sancionado. Pasa al Poder Ejecutivo.

promedio en materia de seguros de vida colectivos.

2º — Si el INDER tiene previsiones al respecto en sus reglamentos de reaseguros del ramo vida y cuáles son éstas.

3º — En caso afirmativo, si la Superintendencia se ha hecho eco de tales reglamentaciones y las aplica a la política aseguradora de ese tipo de seguros.

4º — Si las tablas de mortalidad usadas para calcular las tarifas han sido comparadas con la mortalidad real que para este plan se dan en la Argentina, donde hay más de tres millones de asegurados en él.

5º — Si la Superintendencia de Seguros controla el cumplimiento de la política aseguradora que siguen las entidades de seguros en este tipo de operación.

6º — En caso de que no se aplicaran los principios técnico-actuariales aprobados en los cálculos de primas, qué medidas se adoptan al respecto.

7º — Si se controla que no se modifiquen las condiciones tarifarias aprobadas.

8º — En caso afirmativo cómo es posible que se ofrezcan en plaza primas muy por debajo de las medias que indica la práctica aseguradora de nuestro país y que además, aparentemente, difieren de las que resultan de los cálculos.